

# Cooptación y cerrazón

Las políticas sociales en los gobiernos de Agustín P. Justo y Juan D. Perón

Luis E. Blacha\*  
Graciela Mateo\*\*

## RESUMEN

Este artículo propone una interpretación sociohistórica del pasado de la nación, usando herramientas sociológicas y politológicas, como los conceptos de *fórmula política*, *clase política*, *cooptación* y *cerrazón*, para explicar cómo fundamentan su poder y logran mantenerlo Agustín P. Justo y Juan D. Perón. Con este marco teórico, el acento se pondrá en algunos aspectos de las políticas sociales llevadas a cabo por estos gobiernos, mismos que se mueven entre la opulencia y la pobreza y, sin abandonar el “control social”, aplican políticas correctivas de la desigualdad que –tanto en sus destinatarios como en los elencos técnico-burocráticos que las ponen en práctica– dan muestras de cooptación de miembros de la mayoría.

Palabras clave: clase política, políticas sociales, pobreza, intervencionismo estatal, peronismo.

## ABSTRACT

*Cooptation and blind obstinacy. Social policies in Agustín P. Justo and Juan D. Perón governments.* This article proposes a social and historical understanding of nation's past, using sociologists and political tools such as concepts of *policy formulation*, *politics*, *cooptation* and *blind obstinacy*, to explain how Agustín P. Justo and Juan D. Perón power is founded and retained. On this theoretical framework, the emphasis will be on some aspects of social policies implemented by those governments, which moving between opulence and poverty, without abandoning “social control”, apply corrective policies for inequality –both in recipients as in the technical and bureaucratic staffs that implement them– which shown cooptation of members of a majority.

Key words: political class, social policy, poverty, state intervention, peronism.

\* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas-Flacso, Argentina.

\*\* Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

## INTRODUCCIÓN

El 20 de febrero de 1932, el triunfo de la Concordancia<sup>1</sup> gira hacia la derecha el espectro político argentino e inicia la “nueva era de la democracia restringida”. El flamante presidente de la República, general Agustín P. Justo, encabeza un “Estado jerarquizado y antiliberal” (Rouquié, 1982:352), con un papel activo en la economía, las finanzas y las relaciones sociales. Es el triunfo del sector político más conciliador que llega al poder con el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930.

A partir del control del aparato estatal, los conservadores y el ejército promueven medidas de intervencionismo estatal, frente a la situación socioeconómica que conlleva la crisis de 1929, una de cuyas principales secuelas es el aumento de los índices de pobreza. La realidad política se estructura “en torno al eje oficialismo-oposición, relativamente estable en su conjunto pero con fuerte conflictividad y dinamismo” (Macor, 2001:51) en su interior, hasta el estallido de un nuevo golpe de Estado ocurrido el 4 de junio de 1943, que supone un quiebre en las carreras políticas de la minoría gobernante durante la década de 1930. Una nueva ruptura institucional, que paradójicamente es vista por la sociedad como una restauración de la democracia, se convierte en la plataforma desde la cual Juan D. Perón construirá su poder hasta llegar, en 1946, a ocupar la primera magistratura, poniéndose al frente de un Estado benefactor, popular, dirigista y planificador.

Este trabajo propone una interpretación sociohistórica del pasado de la nación, usando herramientas sociológicas y politológicas, como los conceptos de *fórmula política*, *clase política*, *cooptación* y *cerrazón*, para explicar cómo fundamentan su poder y logran mantenerlo Agustín P. Justo y Juan D. Perón. Con este marco teórico, el acento se pondrá en algunos aspectos de las políticas sociales puestas en práctica por estos gobiernos que se mueven entre la opulencia y la pobreza, aplican teorías económicas en boga, sin abandonar el “control social”, pero apelando a una mayor equidad en la sociedad.

<sup>1</sup> Alianza que a mediados de 1931 constituyen, con fines electorales, el Partido Radical Antipersonalista, el Partido Demócrata Nacional (que a su vez nucleaba a partidos conservadores) y el Partido Socialista Independiente.

**CLASE DIRIGENTE, CLASE POLÍTICA, ÉLITE DEL PODER, “LOS QUE MANDAN”:  
DIFERENTES DENOMINACIONES, CARACTERIZACIONES ANÁLOGAS,  
¿LOS MISMOS SUJETOS?**

Mosca es el primer científico social que desarrolla una teoría moderna de las “élites”, o mejor dicho de las “clases políticas”, como él las llama. Entiende al pasado como “la historia de las minorías dominantes” (Meissel, 1975:7, 21); un escenario en el que surgen y desaparecen esas minorías. Para él existen en todas las sociedades dos clases de personas: “la de los gobernantes y la de los gobernados” (Meissel, 1975:106). La primera es siempre la menos numerosa, desempeña las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de sus ventajas; pero también existe cierta tensión de intereses en su interior. La segunda, la mayoría, es dirigida por la primera de una manera más o menos arbitraria, dándole a la minoría los medios materiales de subsistencia.

Este autor utiliza el término “fórmula política” para remarcar las actitudes consensuadas entre gobernantes y gobernados, como una forma de justificar el poder. La “clase política” sostiene su posición mediante “principios abstractos” o una “fórmula” que es compartida y aceptada por la sociedad toda. La “fórmula política” incluye valores, creencias, sentimientos y hábitos comunes que resultan de la historia colectiva de un pueblo y se corresponde con “una genuina necesidad de la naturaleza social del hombre [...] de gobernar y sentirse gobernado, no con base en la fuerza material e intelectual, sino en un principio moral” (Mosca, 2002:133). Intenta representar así el consenso popular acerca de lo que es considerado *justo* dentro de una comunidad, en una determinada configuración temporal. El concepto tiene cierta abstracción para evitar una revisión constante, pero necesita tener alguna relación con las características concretas de la sociedad en la que se inscribe. Si ese *anclaje* con la sociedad se torna irreal, la fórmula política se debilita y la clase política desgasta su fundamento de poder, pudiendo perder su posición de privilegio.

El carácter abstracto de la fórmula política permite extender el dominio de la clase política a grandes extensiones territoriales, potenciado por su control de la moderna maquinaria estatal. Esta estructura burocrática también permite que se lleven a cabo los aspectos concretos de la fórmula política. El carácter concreto es

una encarnación de lo abstracto y se produce esporádicamente. El uso de la fuerza, como breves demostraciones de la fortaleza de la clase política, es un ejemplo del carácter concreto de esta fórmula. Las acciones de gobierno que intentan contentar a la mayoría, son otro ejemplo de este carácter. Una fórmula política efectiva plantea un balance entre ambas características, donde siempre prima la adecuación con la configuración. En los casos estudiados nos centraremos en la intervención estatal para solucionar las desigualdades sociales que trae aparejada la crisis de 1929.

El dominio de la minoría no está justificado por un estatus moral superior sino por su organización. Por esta razón, el poder es –para Mosca– organización. El peso que la minoría tiene sobre los individuos de la mayoría desorganizada es “irresistible frente a cada individuo de la mayoría, que se encuentra solo ante la totalidad de la minoría organizada” (Mosca, 2002:110). Las masas también ejercen cierta influencia en la clase política. El poder es una relación, asimétrica, entre gobernantes y gobernados.

Carl Wright Mills, por su parte, propone un enfoque de corte más sociológico al estudiar los estratos cimeros de la sociedad, en un estudio de caso (la sociedad estadounidense del *New Deal*). Para este autor, el estudio de las “élites” es central para comprender la estructura social. Según esta concepción, deben observarse los orígenes sociales y educativos comunes dentro de la “élite del poder”, es decir, las instituciones de enseñanza y lugares de socialización y ocio, ya que el espacio “adquiere significado social mientras se establece en él alguna relación recíproca” (Fressoli, 2000:62). Por esta razón le asigna a las bases comunes de esta clase un rol central en la toma de decisiones y en la intercambiabilidad de posiciones institucionales entre sus miembros, quienes establecen acciones recíprocas entre ellos, tomando en cuenta a su igual.<sup>2</sup> Este aspecto refuerza el concepto mosquiano de clase política.

Para Wright Mills hay tres órdenes principales: el político, donde se encuentran “las instituciones mediante las cuales los hombres adquieren, manejan e influyen en la distribución de poder y autoridad dentro de las estructuras sociales”; el económico, con las entidades “mediante las cuales los hombres organizan la mano de obra, los recursos y los medios técnicos en orden a la producción y

<sup>2</sup> Un ejemplo lo constituiría el caso del Senado de la Nación. Véase Botana, 1977.

distribución de los bienes y servicios"; y el militar, con sus instituciones, "mediante las cuales los hombres organizan la violencia legítima y supervisan su uso" (Agulla, 1987:471). Según este planteamiento no puede pensarse la sociedad sin el individuo ni viceversa: un mayor desarrollo de la sociedad no sólo planteará más integración de los individuos al conjunto social sino un desarrollo más amplio de ellos como tales. Se produciría una suerte de doble movimiento, en el cual la sociedad se desarrolla y necesita la división del trabajo, con sus correspondientes individuos especializados. La relación entre individuo y sociedad se da en un contexto dinámico, una configuración, cruzada por relaciones de poder.

El rasgo clave de la "élite del poder" de Wright Mills es la intercambiabilidad de funciones entre sus miembros a través de los diferentes órdenes de la sociedad. Este pasaje es posible gracias a la existencia de acciones recíprocas y de cierta fidelidad que se origina en su socialización común previa. En la "élite del poder" la conciencia de clase aparece enfatizada, haciendo suponer una "superioridad moral" en la minoría, por lo mucho que su autor resalta su organización y la defensa de sus intereses.

La minoría gobernante la integran quienes tienen el máximo de lo que puede tenerse, gracias a sus posiciones institucionales, las cuales les permiten tomar decisiones con importantes consecuencias. El control de la burocracia moderna se vuelve imprescindible para consumir las decisiones que toma esta clase y su alcance nacional. Puede entenderse así porque tanto Agustín P. Justo como Juan D. Perón, luchan por conseguir el predominio dentro de un Estado que aumenta sus funciones para paliar la crisis de raíces internacionales. Surge una novedosa élite técnico-administrativa, que el peronismo incrementa, incorporando a representantes de la clase media y del movimiento obrero.

El poder necesita del saber, la organización y la calculabilidad para que la sociedad le brinde su apoyo. De la fórmula política depende cómo el grupo dominante controla la maquinaria estatal, cómo resuelve sus diferencias internas y cómo es su relación con la burocracia que lleva adelante las políticas dictadas por la minoría.

Tanto Wright Mills como Mosca destacan la organización como un aspecto clave de las clases dirigentes, posibilitando la intercambiabilidad entre sus miembros. Si se le suma la socialización y el contacto continuo, no es difícil entender cómo se llevan a cabo

políticas públicas acordes entre las diferentes áreas del Estado. La burocracia funciona con criterios de racionalidad pero las decisiones no dejan de ser políticas, pasionales; es ahí donde se entiende la importancia de la “élite del poder” y la rápida difusión de nuevas ideas en su interior y por qué se frustra cualquier tipo de confrontación interna cuando existen intereses contrarios a los de este grupo. La socialización previa y su actualización continua son de suma importancia.

Según Wilfredo Pareto, para mantenerse en su lugar de privilegio “las élites gobernantes” cuentan con dos mecanismos: la fuerza y la astucia, que recuerdan a “la vieja teoría de Maquiavelo de los *leones* y los *zorros*” (Agulla, 1987:232-233). La fuerza le permitiría reprimir a los elementos vigorosos que surgen en la masa, mientras que la astucia haría posible captar a su favor a los individuos más fuertes. El vigor que aportan los nuevos elementos de la “élite gubernamental” incluye el uso de la fuerza. La movilidad social pasa a ser una expresión más de la “circulación de las élites”.

El concepto *circulación* de la teoría de Pareto es importante para caracterizar la “circulación de las clases políticas”, que desde la interpretación propuesta en este trabajo incluye tres tipos distintos con tres tiempos diferentes. El primer tipo, el más frecuente en las sociedades actuales, es la circulación como intercambiabilidad que hace referencia al pasaje entre los tres órdenes de los miembros de la élite, según Wright Mills. El segundo tipo, que tiene una frecuencia media, es la circulación como cooptación, es decir, el ingreso de los elementos más vigorosos de la masa en la minoría. Ambos pueden interpretarse como aspectos concretos y abstractos de la fórmula política. El último tipo de circulación, se refiere al reemplazo de una “clase política” por otra y sus consecuencias sólo se observan en el largo plazo.

Un balance de los autores tratados plantea como una necesidad la presencia de la jerarquía en una sociedad, es decir, en una configuración que tome decisiones, posibilite y refuerce la unidad social. La sociedad necesita de la organización, la cual sólo parece estar presente en la clase política. Las masas desempeñan un papel subordinado, pero importante al ser el árbitro –directa o indirectamente– de las decisiones que esa clase toma, ya que su descontento puede provocar la caída de una clase política.

Si la sociedad deja de aceptar una fórmula política determinada, la clase política se desgasta rápidamente. La minoría no debe pensarse como un conjunto estático e inalterable, que sólo esporádicamente es reemplazado por otro grupo de iguales características, sino como un proceso en continuo movimiento que debe adaptarse al contexto, buscando cooptar nuevos integrantes capaces de introducir ideas renovadas y dar apoyo suficiente para que el sistema funcione sin llevar adelante cambios radicales. El concepto *configuración* de Norbert Elias es clave en este sentido, pues entiende a la sociedad como un proceso en constante movimiento.

Es la clase política quien tiene el control directo o indirecto (capacidad de influir) sobre el Estado. Necesita que sus individuos actúen en varios órdenes sociales a lo largo de su vida; en esta intercambiabilidad actúan tanto la socialización, la fidelización y la fórmula política. Para lograrlo se precisa de una clase intermedia, capaz de cumplir las exigencias propias de una élite técnico-burocrática, convertir en realidad esas decisiones y actuar como fusibles reemplazables cuando las mismas no son bien recibidas por la mayoría. Esta situación revela el carácter dinámico de la relación entre clase política y el resto de la sociedad.

Las interacciones al interior de la clase política también son dinámicas, y no exentas de tensiones entre sus miembros, a la hora de sostener proyectos políticos diferentes, tal como ocurre con los participantes del Golpe de Estado de septiembre de 1930. Estas diferencias son rápidamente puestas en un segundo plano cuando se produce la amenaza de perder la posición de privilegio. La fórmula política dirime las divergencias al interior de la minoría, reasegurando su lugar de privilegio frente al resto de la sociedad. Mientras otras acciones cierran el acceso a esos lugares privilegiados que posee la minoría y marcan el camino para la cooptación de nuevos miembros.

#### COOPTACIÓN, CERRAZÓN Y EL INGRESO A LA CLASE POLÍTICA DE JUSTO Y DE PERÓN

La fórmula política señala el camino para la cooptación, tanto en el número como en el modo en que se coopta a los recién llegados. La educación y el contacto continuo son factores claves para superar las

asperezas. Así ocurre con la élite técnico-burocrática que se forma durante el gobierno de Uriburu y adquiere gran importancia durante la presidencia de Justo. Son hombres que –generalmente– por su origen social no pertenecen a la clase política tradicional, pero fueron necesarios en los nuevos tiempos del Estado interventor. Con el peronismo, por primera vez en la historia del país, los obreros o sus dirigentes ocupan cargos de importancia en el gobierno.

Luego de 1943, en la Argentina parecen truncarse las carreras políticas de casi todos los miembros de la minoría, lo cual no indica el reemplazo total de una “clase política” por otra. Los actores dominantes antes de la Revolución del 4 junio de 1943, siguen teniendo influencia –aunque menor a la que tuvieron durante los gobiernos radicales– dentro del quehacer nacional, por sus posiciones orgánicas extraestatales: Museo Social Argentino, Asociación Nacional del Trabajo, Liga Patriótica Argentina, etcétera (McGee Deutsch, 2003:193-248).

El concepto de cerrazón ya está presente en un clásico de la sociología como Max Weber, quien la define como “el proceso por el cual las colectividades buscan maximizar sus recompensas al restringir el acceso a recompensas y oportunidades a un limitado círculo de elegidos” (Parkin, 1974:3) mediante algún atributo de grupo. Su propósito siempre es minimizar las oportunidades sociales o económicas para los grupos excluidos. Frank Parkin remarca que esa acción de grupo puede generar una reacción contestataria en aquel que es víctima de ella. Son dos tipos recíprocos de acción que se basan en el poder de la exclusión y en el poder de la solidaridad.<sup>3</sup> Estas estrategias de solidarización, generan una presión que va desde los excluidos a los privilegiados y desafían la estabilidad que la cerrazón intenta darle a quienes la llevan a cabo. La cerrazón marca al segundo tipo de circulación, en tiempos y modos en los que se realiza la cooptación. Podría entenderse que la cerrazón es, en cierta medida, la cara oculta –que hace “el trabajo sucio”– de la fórmula política.

La cerrazón de la “clase política” hace que ésta se encuentre con mayores probabilidades de caer en errores, al no permitir el ingreso

<sup>3</sup> El primer tipo permite a un determinado grupo social mantener o agrandar sus privilegios en el proceso de subordinación; mientras que el segundo puede ser entendido como las respuestas colectivas de los grupos excluidos, incapaces de maximizar sus recursos debido a que son víctimas de la exclusión.

de individuos con nuevas ideas pertenecientes a las masas. Éstos son necesarios porque la fuerza de la costumbre naturaliza las posiciones de los hombres y diluye las virtudes de la “clase política”. Junto a estas tendencias a la inercia, actúan siempre fuerzas renovadoras de los ordenamientos sociales, y si una minoría no posee los atributos que la llevaron a gobernar o esos atributos ya no son valorados en la sociedad, puedan ser reemplazados.

Los dos grandes partidos de masas de Argentina, el radicalismo y el peronismo, construyen parte de sus tradiciones contrastándose con “la infamia” de la década de 1930, y sobre ese fondo se iluminan hacia el pasado los méritos de la “causa radical”, y hacia el futuro las conquistas de la Argentina justicialista. Las figuras de los líderes que encarnan estos valores, Yrigoyen y Perón, resaltan sobre ese fondo oscuro de un tiempo que se impone a sus protagonistas, aunque uno de ellos, sea el general Agustín P. Justo, un personaje sin tradiciones que lo reclamen.

La administración estatal como instrumento político no es el único elemento común entre el accionar de Justo y Perón. Ninguno de los dos es porteño; Justo es entrerriano, hijo de inmigrantes y genuino representante de la clase media argentina. Perón, nacido en Lobos, vive en la Patagonia, donde su padre se dedica a la cría de ganado lanar. La familia de Justo, a diferencia de la de Perón, tiene efectivas vinculaciones con la clase política, que le permiten al futuro presidente tomar contacto, desde joven, con ella.<sup>4</sup> Ambos inician sus estudios secundarios en Buenos Aires e ingresan en el Colegio Militar. Mientras el doctor Justo ve en la actividad militar sólo el complemento de una trayectoria política, a la que se ingresa por el camino de la profesión liberal, y por ello se resiste a que su hijo elija la carrera de las armas, Perón narra alguna vez: “A los quince años mis padres me entregaron a la patria, con ella crecí y me hice hombre” (Sidicaro, 1996:12). El Colegio Militar –creado en 1869 con el objetivo de profesionalizar a los cuadros, aislando a los cadetes de la población civil– se transforma en un ámbito en el cual se discute la política con entusiasmo. De acuerdo con la teoría de Wright Mills

<sup>4</sup> Su padre, abogado y político de filiación mitrista, fue por un breve periodo gobernador de Corrientes y luego ocupó un cargo judicial en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte estaba emparentado con el dirigente socialista Juan B. Justo.

esta institución es un espacio de educación y socialización y un poderoso “ascensor” del estatus social.

#### EL ESTADO INTERVENTOR Y SUS POLÍTICAS SOCIALES

En la crisis de 1930, “crisis orgánica” desde la perspectiva gramsciana de Waldo Ansaldi, confluyen –de acuerdo con el planteo teórico de Gabriel Almond y Lucien Pye– las crisis de identidad, dependencia, participación, legitimidad y distribución. Esta última lleva implícita la pobreza, término polarizado y polisémico. Dada una situación de carencia de bienes y servicios con efectos psicofísicos para el carenciado, puede decirse que “la pobreza irrumpe como contexto y como vivencia” (Fernández, 1984:7). Si bien puede hablarse de *carencia absoluta o privaciones relativas*, si se confrontan las carencias con algún “grupo de referencia” (Moyano, 1987:148-150), la pobreza –como otros problemas sociales– no encuentra una explicación sólo en cuestiones económicas o en desajustes en la dinámica de crecimiento. Se percibe entonces la estrecha relación existente entre la cuestión social, las mediaciones del sistema de poder y las decisiones estatales, en relación con las condiciones de vida (Girbal, 1999).

La crisis genera profundos cambios económicos, sustanciales mutaciones políticas, apreciables alteraciones en la escala de valores vigente (orden, propiedad, ahorro) y en las mentalidades colectivas que marchan entre la tradición y la vanguardia. Ante esta nueva configuración, la clase política construye una fórmula política en la que el equilibrio social y económico aparece como una demanda a satisfacer.

Mientras el Estado se hace cargo de subsidiar a los empresarios, comerciantes y productores rurales, es posible advertir un cambio unilateral en las estrategias de los dirigentes, quienes refuerzan su carácter corporativo frente a un gobierno nacional que se fortalece en la toma de responsabilidades (O’Connell, 1984:479-514). Técnicos, funcionarios de segunda línea y representantes de las profesiones liberales se convierten en aliados insoslayables de la clase política. Éstos no sólo llevan a cabo sus decisiones, sino que son –muchas veces– la cara visible de esas medidas, aunque no son políticos profesionales sino técnicos.

*Estudios e investigaciones estadísticas.*

*Contar, clasificar: una buena herramienta para la cooptación*

Dada la multiplicidad y variedad de los hechos que interesan a la política social, se hace indispensable orientar la observación estadística. La División de Estadística del Departamento Nacional del Trabajo, dependiente del Ministerio del Interior, desarrolla una labor intensa a partir de 1935, facilitada por los mayores recursos presupuestarios.

El control social –que sigue inquietando a la clase alta de viejo cuño– continúa formando parte de las preocupaciones sustantivas de la dirigencia nacional que actúa en consecuencia con los nuevos tiempos. Las migraciones internas iniciadas en la década de 1920 y agudizadas en la de 1930, acompañan el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Los centros urbanos del litoral son los que concentran a los migrantes y dan forma al Gran Buenos Aires.

El presidente Justo percibe la necesidad de conocer cifras reales y actualizadas que traduzcan cuantitativamente aspectos de la problemática social, a fin de juzgar su importancia y estudiar sus exigencias.<sup>5</sup> En 1932 se levanta un Censo Nacional de Desocupados, que se actualiza periódicamente.<sup>6</sup> El objetivo del relevamiento, dirigido por el abogado barcelonés José Miguel Figuerola,<sup>7</sup> es obtener un conocimiento preciso de las características nacionales del problema del paro forzoso, generalizado a escala mundial en virtud de la depresión de la década (Panettieri, 1966).

<sup>5</sup> República Argentina, *Poder Ejecutivo Nacional, 1932-1938*, tomo IX, Buenos Aires, 1938.

<sup>6</sup> En 1934 se sanciona la ley 11.868 que dispone la realización de un Censo Semestral de Desocupados en todo el territorio de la nación en los periodos de mínimo y máximo de ocupación conocidos según zona.

<sup>7</sup> Abogado especialista en relaciones laborales, quien en la década de 1920 participa en España en el gobierno del general Miguel Primo de Rivera. En 1930 emigra a Argentina y se integra al Departamento Nacional del Trabajo. Desde aquí investiga los problemas laborales del país, recopilando estadísticas y macerando análisis técnicos. Su formación y cualidades personales son valoradas por el gobierno de Justo. Sin embargo, es con Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión que el nombre de Figuerola alcanza notoriedad pública y es cooptado para su fórmula política.

Sobre la base de los diagnósticos provinciales y de los territorios nacionales que aporta el relevamiento de desocupados,<sup>8</sup> la medida más importante que adopta el gobierno nacional es la puesta en funcionamiento, a partir de mayo de 1935, de la Junta Nacional para Combatir la Desocupación (Junald). Esta agencia estatal desarrolla una labor de control y ayuda social hasta la década de 1940, cuando un decreto de 1944 anuló los alcances de la ley 11.896 que la creara, en agosto de 1934. Durante esta década la Junta entiende que el problema ocupacional pasa en Argentina por la necesidad de “regular el trabajo”.

Las medidas adoptadas por la Junald son interesantes para establecer las características y dimensiones del Estado en relación con el desempleo, vinculado con el medio rural y la crisis de las empresas agrícola-ganaderas. Es significativo su desempeño para puntualizar cuánto de tradición y cuánto de cambio encierran las medidas propuestas por la dirigencia político-económica argentina en la década de 1930, cuando se muestra dispuesta a seguir ejerciendo el control social. Un tema que preocupa a la élite desde los tiempos de la Argentina moderna (1880) y que retoma en la década de 1930 como parte de la regulación del empleo, la marginalidad y aun la pobreza de amplios sectores de la sociedad (Girbal-Blacha, 2003:25-53).

Los dirigentes de la clase política hacen uso novedoso de las instituciones estatales. Son la socialización previa y las fidelizaciones las que les permiten adaptarse rápidamente a estas nuevas ideas, difundidas entre sus miembros. Así se actualiza y refuerza la organización que sostiene a la clase política.

En 1935 se publican los resultados de la encuesta sobre costo de la vida en la ciudad de Buenos Aires, y de sus comprobaciones se deriva la formulación de un presupuesto tipo. Un instrumento racional y moderno que encuadra perfectamente con el modelo keynesiano vigente. El Estado intervencionista se consolida y suma su decisión

<sup>8</sup>De un total de 11 658 214 habitantes en todo el país, 333 997 estaban desocupados, es decir 2.86% de la población, registrándose los mayores índices de paro en la provincia de Buenos Aires (26.60%), Capital Federal (26.15%), Santa Fe (13.29%) y Córdoba (8.75%). República Argentina. Departamento Nacional del Trabajo, *La desocupación en la Argentina*. 1932, Talleres Gráficos Compañía Impresora Argentina, Buenos Aires, 1933, p. 20.

a la acción de los grandes empresarios, ganaderos y exportadores. Promueve también, en 1935, un Censo de menores escolares que trabajan por cuenta ajena. Una tarea de diagnóstico que, aunque limitada a un muestreo de escuelas capitalinas, da indicios claros de la preocupación que tiene la dirigencia por la “cuestión social” y por seguir manteniendo la conducción de la educación. Si bien el gobierno no puede introducir obligatoriamente el sentimiento de orden y patriotismo en cada hogar inmigrante, se preocupa por encontrar modos de transmitir el nacionalismo a sus hijos. Éstos frecuentan las escuelas del Estado, donde por acción de otra agencia gubernamental –la Inspección General de Enseñanza– se emprende una tarea metódica de instrucción nacionalista, retomando y profundizando los reclamos del nacionalismo de élite de la década de 1920. Restaurar el espíritu nacionalista en la enseñanza pública como vía de argentinizar al inmigrante es una cuestión recurrente en la política de Justo. Se la emplea para lograr la asimilación del extranjero por medio de la primera generación argentina de una inmigración “mal adaptada”, para la opinión y los intereses nacionalistas. Es una manera de ampliar el consenso y de sumarle aspectos concretos a la fórmula política. Son medidas promotoras de acciones recíprocas y fidelidades a partir de la socialización. Las políticas sociales que controlen los efectos negativos de la indigencia forman parte de este accionar.

Aumenta la burocracia y el Estado amplía sus funciones. Se cuenta, se clasifica, se ordena y se educa, acentuando el control sobre los habitantes. La clase política argentina intenta crear ciudadanos que resulten útiles a sus propósitos, para reforzar su posición de poder que supone la relación entre gobernantes y gobernados.

*Legislación obrera y previsión social  
en la fórmula política de Justo: antesala del populismo peronista*

La obra de gobierno de Justo en materia de legislación laboral y previsión social, se manifiesta en un conjunto de proyectos del PEN o de parlamentarios que logran sanción entre 1932-1938. Las leyes sobre descanso dominical, indemnización por accidentes de trabajo, limitación legal de la jornada laboral, jubilaciones y pensiones constituyen el armazón del nuevo derecho del trabajo en

el país. En 1934 se reforman seis artículos del Código de Comercio y se sanciona el Estatuto del Empleado de Comercio; la conocida ley de despido que, al fundarse en el principio de la autonomía de la voluntad y de la libertad de trabajo, logra brindar una relativa estabilidad para cientos de miles de empleados, evitándose que el cese de su trabajo, sin causa justificada, signifique el de sus medios de subsistencia. Por iniciativa del socialista Alfredo Palacios, y con el apoyo del oficialismo (signo de su apertura) se aprueba la ley sobre protección a la maternidad. Es el mismo PEN quien reglamenta y clasifica beneficiarios, derechos y obligaciones, dejando de lado cánones consagrados como fundamentales en las instituciones argentinas, abriéndose y adaptándose a la nueva configuración: el subsidio, creado por la ley llega a la empleada u obrera casada o soltera, unida legal o ilegalmente, de todo el país, como así también la asistencia médica aconsejada por el progreso de la higiene y la medicina social. Se une a estas nuevas leyes, la del Sábado Inglés, completándose la limitación de la jornada legal del trabajo, reducida de 48 a 44 horas; y la menos conocida ley sobre asientos para los trabajadores, conocida como “ley de la silla”.

Otro conjunto de iniciativas no logra sanción y quedan como expresión doctrinaria para una futura administración (la surgida de la Revolución de 1943, y especialmente promovidas por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión). Es el caso del Código del Trabajo, que no obstante el empeño de sus iniciadores, no logra sanción, pero evidencia el interés de Justo por una obra jurídica que contribuya al entendimiento entre patrones y obreros, delimitando los derechos de cada uno, en beneficio de la economía y de la paz social. El tema del salario mínimo –parte de la cuestión social–, traducido en un proyecto que concuerda con el sancionado por la Conferencia Internacional del Trabajo de 1928 y en el que trabajan técnicos de la especialidad, tampoco obtiene la sanción parlamentaria.

La acción gubernativa de Justo se esfuerza por fortalecer la vigilancia de la aplicación de la legislación vigente y buscar nuevas normas jurídicas para resolver la llamada cuestión social (Despotin, 1937:142). Se dota de más aspectos concretos a la fórmula política que lo sostiene en el poder, atendiendo los problemas sociales.

*Vivienda*

El crecimiento demográfico que experimenta la Capital Federal<sup>9</sup> y el área metropolitana de Buenos Aires, producto de las migraciones internas, lleva a una redistribución espacial, expresada en un proceso de urbanización creciente que genera mayores problemas de vivienda, que inquietan al gobierno de Justo. Esta preocupación se traduce en la construcción, a través de la Comisión Nacional de Casas Baratas, de la Casa Colectiva “América”, compuesta por 95 departamentos, ubicada en las cercanías del puerto, una zona densamente poblada por obreros, jornaleros y empleados de escasos recursos y con familias numerosas. Otro ejemplo es el Barrio Parque “Guillermo Rawson” constituido por 104 casas individuales, vendidas en su gran mayoría a sectores de clase media. Completan este barrio 18 casas colectivas, con una finalidad bien determinada por la administración justista: extirpar el “conventillo” –asociado al inmigrante– facilitando en su lugar una vivienda higiénica y sin los perjuicios sociales que implica el hacinamiento.

El presidente Justo advierte que el problema habitacional se extiende a todo el país. La Comisión Nacional de Casas Baratas encara un programa de investigación sobre el tema a escala provincial y proyecta la construcción de casas económicas en el ámbito de los territorios nacionales, comenzando por el de Misiones. La intención de las autoridades es alentar ahí la radicación de la población nativa y su preparación para la explotación de granjas familiares,<sup>10</sup> pero con escasos recursos el problema se mantiene. También se producen iniciativas de gobiernos provinciales, como los de Mendoza y Buenos Aires, que, aunque no siempre se concretan, indican la magnitud del problema habitacional y la necesidad de pensar la vivienda más allá de Buenos Aires y los grandes centros urbanos. La cuestión de la vivienda rural se incluye en la problemática más amplia de las condiciones de chacareros, colonos y trabajadores agrícolas, duramente golpeados por la crisis de 1930

<sup>9</sup> De acuerdo con el Cuarto Censo General de la ciudad de Buenos Aires levantado en 1936, la ciudad tenía una población de 2 415 142 habitantes, adelantando la tendencia que se verifica luego en el Censo de 1947.

<sup>10</sup> República Argentina, *Poder Ejecutivo Nacional. 1932-1938*, vol. IX: Comisión Nacional de Casas Baratas Buenos Aires, 1938.

y por los cambios en la comercialización de la producción agrícola-ganadera, impuestos por la nueva coyuntura internacional. Diversas agencias gubernamentales se ocupan de la vivienda rural, que pasa a ser considerada una cuestión “específicamente argentina”. Se produce así una proliferación de imágenes del habitar vinculadas a lo rural y al interior, atendiendo a las particularidades climáticas y regionales. Arquitectos, ingenieros, técnicos, participan desde las distintas estructuras burocráticas del Estado en la búsqueda de soluciones que pocas veces se concretan. Sin embargo, se pone de manifiesto en este aspecto de las políticas sociales, la adaptabilidad a la configuración, propia del gobierno de Justo, quien ha logrado (a partir de la segunda circulación) contar con el apoyo de un grupo social más amplio. Su fórmula política tiene mejor balance.

#### EL ESTADO BENEFADOR Y SUS POLÍTICAS SOCIALES

El discurso peronista propone una revolución en la esfera de lo social: la construcción de un Estado con capacidad de modelar la sociedad, asegurando el imperio de determinados valores que garanticen el crecimiento con justicia social (Belmartino, 2005:104). En el área de las políticas sociales dicha intervención modeladora se basa en los fundamentos doctrinarios y supuestos técnico-organizativos elaborados en la década de 1930. La intervención planificadora del Estado otorga legitimidad a la idea de construcción de lo social con el auxilio instrumental de lo técnico, sobre la base de una determinada orientación política: terminar con el viejo país asociado a la oligarquía y sus privilegios, y crear la *Nueva Argentina* a partir de la generalización del bienestar.

#### *Planificar también sirve para cooptar*

La adaptación peronista del ideal planificador comienza con el famoso Consejo Nacional de Posguerra, un organismo de estudio de la realidad y de asesoría en políticas económicas y sociales, creado por Perón en 1944 y presidido por José Figuerola y Tressols.

Para planificar es necesario conocer. La recopilación de información, conocer aspectos relevantes de la sociedad, queda en manos del Estado, que se erige en centro monopolizador de información estadística. La posesión del saber técnico permite la previsión y la planificación. Se crea entonces la Dirección General de Estadística, dependiente de la Secretaría Técnica, que absorbe todos los organismos que hasta ese momento llevan adelante tareas de relevamiento en las diferentes dependencias del Estado. Una razón por la cual durante la gestión de Perón se levanta el Cuarto Censo Nacional.

El Estado debe contar con un núcleo burocrático idóneo para planificar. Figuerola propone formar competencias creando escuelas de funcionarios, y así obtener técnicos de alto nivel, con ingreso por concurso, obligando a definir los perfiles adecuados. Se emprende una acción didáctica aseguradora de la participación de los empleados como sujetos activos en el proceso de modificar y agilizar el sistema burocrático.

Esta carrera administrativa y sus estímulos son los medios planteados para jerarquizar al personal desde los nuevos sistemas de valores de la administración. Pero, al mismo tiempo, la “contracara” de ese objetivo de formar un cuerpo “científico y apolítico” es el control sobre los sectores opositores, asumido por los organismos de supervisión pero con funciones coactivas. Esta “desviación” de las metas de racionalidad se plasma en los documentos donde se identifica a los enemigos o a quienes son acusados de *boicotear* las políticas de gobierno.

Eficiencia, racionalidad y control político son los términos de una difícil ecuación, ya que si en su génesis existe un intento por consolidar un equipo de gobierno competente, las oportunidades del sistema facilitan la creación de espacios de control ideológico funcionales a las estrategias políticas.

La presentación del plan pone de manifiesto esa irresoluble tensión entre neutralidad tecnocrática y concentración de poder que –paradójicamente– son dimensiones de un mismo problema clave entre los dilemas para la interpretación del peronismo (Berrotarán, 2002). Figuerola es el artífice del Primer Plan Quinquenal presentado por el presidente ante el Legislativo el 21 de octubre de 1946. En este sentido pocas veces el peronismo legitima una voz autorizada

al lado de Perón.<sup>11</sup> Para la coordinación y puesta en marcha del proceso de planificación, la Secretaría Técnica instrumenta dos tipos de acciones prioritarias. Por un lado, la organización de los Consejos, cuyo objetivo es asegurar los consensos. Por otro, la solicitud de los proyectos elaborados por los diferentes ministerios para su puesta en coherencia. Estos Consejos no constituyen una creación *ex novo*. En los últimos años del gobierno conservador los sectores propietarios demandan su creación para asegurar su presencia en el diseño de las políticas públicas frente a la autonomía creciente que asumen las agencias estatales, en un intento por recuperar espacios. Son también impulsados durante el gobierno militar, con nuevos roles, como lugares privilegiados para la construcción de consensos.

Esas nuevas estructuras son las esferas donde los grupos cercanos a Perón acumulan poder y producen realineamientos al interior del propio Estado, en paralelo a los conocidos apoyos sociales. Pues si bien el gobierno busca retóricamente definir los límites entre lo público y lo privado y nacionalizar el Estado, los Consejos –al integrar representaciones sectoriales– crean espacios que institucionalizan la interrelación.

### *Legislación obrera*

En octubre de 1943 Perón se hace cargo del Departamento Nacional del Trabajo, elevado en noviembre al rango ministerial de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Comienza a encararse la solución a la crisis de distribución que aqueja al país. Entre 1944-1945 se dicta el mayor número de decretos-leyes y disposiciones destinadas a mejorar la situación económica de la clase obrera; mientras se brinda protección y fomento a la industria que produce para un mercado interno en expansión. Si el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) le permite a Perón “seducir a los hombres de armas” (Page, 1984:70-79), la flamante Secretaría le permite seducir a la clase obrera, con mejoras salariales, para integrarla a su proyecto político (Del Campo, 1983). El organismo desarrolla desde entonces una doble tarea de codificación, y de reconocimiento y control. En el primer caso para ampliar el

<sup>11</sup> Otra figura legitimada es Arturo Sampay con la reforma constitucional de 1949.

radio de acción de la legislación laboral, que comprende ahora a los trabajadores industriales. Se los incluye entre los beneficiarios de la ley de despidos, se practica la aplicación efectiva de la ley que estipula las 48 horas semanales de trabajo; se le otorgan vacaciones pagas y sueldo anual complementario y se crean tribunales de trabajo para acelerar las causas judiciales laborales. La Secretaría redacta estatutos para reglamentar previsión social, vivienda, vacaciones y trabajo rural, que inmediatamente se convierten en ley. En materia de reconocimiento y control, la organización obrera recibe un notable impulso basado en el paternalismo gubernamental que se expresa, por ejemplo, en aumentos generales de salarios y una legislación que regula la constitución y funcionamiento de las asociaciones profesionales (Girbal, Zarrilli, Balsa, 2001:87-88). La fase organizativa de la estrategia de Perón abarca el estímulo a la agremiación por oficios e industrias en las cuales los trabajadores no habían establecido sindicatos. Para aprovechar las ventajas que la Secretaría ofrece, los trabajadores deben agremiarse, y dada su dependencia con el gobierno, para fortalecer su posición en las disputas con los patrones, estos nuevos sindicatos nacen ligados a Perón. Es su estilo para combatir la pobreza.

El aumento en el nivel ocupacional de los obreros (de 452 307 personas en 1937 a 1 151 309 en 1947), es otra expresión de los logros en la lucha peronista contra la pobreza, al igual que un incremento del 99.8% en los salarios (1943-1947). Además mientras que entre 1939 y 1947, el costo de vida crece 78.5%, el salario medio aumenta 102.3% en el mismo periodo. Guarismos que el Estado hace corresponder con el afianzamiento paulatino de la industria nacional y a los que considera “una demostración evidente del resultado de la aplicación de las medidas legales tendientes a lograr una mayor justicia social”.<sup>12</sup>

### *Vivienda*

Para el peronismo histórico la vivienda se presenta asociada a vastos programas estatales de reivindicación social y a iniciativas tendientes

<sup>12</sup> Cámara de Senadores de la Nación, *Diario de Sesiones 1948*, tomo I, Buenos Aires, 1948, pp. 23-24.

al mejoramiento de las condiciones de vida, así como a importantes planes de obras públicas, en los que la educación, la salud y el esparcimiento populares ocupan espacios centrales. La fórmula política construida por la clase política que lidera Perón se actualiza en este caso puntual por medio de distintas fuentes: por un lado, los principios de la doctrina social de la Iglesia, contenidos en la encíclica *Rerum Novarum* del papa León XIII, que presta preferente atención a la vivienda obrera. El keynesianismo contenido en el *New Deal* –capaz de revolucionar las expectativas de los ciudadanos– también está presente, ya que si el Estado financia la construcción de caminos, no ha de pasar mucho tiempo para que esperen de él políticas en materia habitacional. Por otro, se advierten las influencias del llamado Movimiento Moderno de Arquitectura, cuyos adherentes entienden el diseño no ya desde un punto de vista estético, sino desde sus condicionantes económicos y racionales. Es un intento de dotar de mayores aspectos concretos a la fórmula política.

El problema habitacional requiere de un diagnóstico –también a cargo del Consejo Nacional de Posguerra– que, coincidente con otros informes, sostiene que la capacidad de alojamiento –desbordada ya por el crecimiento demográfico vegetativo– se había agravado con las migraciones internas hacia las ciudades. Acorde con los lineamientos dirigistas del populismo se crea la Administración Nacional de la Vivienda, con cuatro instrumentos para resolver la problemática: los créditos hipotecarios, la construcción directa por parte de las autoridades, la liberación de derechos de importación para los materiales de construcción y la prórroga de los contratos de alquiler.

Los planes quinquenales atienden a los sectores obreros y a la clase media baja y tienen un alcance a todo el territorio nacional, aunque se privilegia a las áreas urbanas y a las regiones de mayor concentración de población, como la ciudad de Buenos Aires (Barrio Presidente Perón en Saavedra) y el conurbano bonaerense (ciudad Evita, partido de la Matanza) (Gaggero y Garro, 1996:116).

Un elemento interesante que surge del análisis de los materiales utilizados es la comprobación de que el gobierno nunca intenta construir “casas baratas” o “viviendas de interés social” para una población de segunda clase. Se trata de proveer de viviendas dignas, planificadas sobre la base de normas de habitabilidad, a seres humanos con iguales derechos que el resto de los conciudadanos.

Es una propuesta en coincidencia con el no reconocimiento de la beneficencia, sino de la “justicia social”. La política de viviendas se incrementa a partir de la crisis de la década de 1950, evidenciándose que el gobierno intenta, mediante componentes “invisibles” del salario, revertir la tendencia decreciente de los salarios reales (Campins, Gaggero y Garro, 1992).

Por otra parte, se comprueba en la puesta en práctica de esta política social la relativa autonomía del Estado y su capacidad técnica para llevarla a cabo. La clase política sigue dando muestras de apertura, de adaptabilidad y de su interés por mantener consenso con las masas, al tiempo que incorpora una estructura burocrática idónea.

#### REFLEXIONES FINALES

Los instrumentos que aportan la sociología y la ciencia política para explicar la conformación de *los que mandan*, de la “clase política” que por su organización es capaz de imponerse a la mayoría, muestran que las políticas sociales son parte significativa de sus preocupaciones.

El acercamiento teórico que entiende a individuos y sociedad como procesos interdependientes cruzados por relaciones de poder, resalta la importancia de la socialización en la organización de la clase política y posibilita combinar esa organización con la existencia de tensiones al interior del grupo, entendiendo al poder como una relación asimétrica entre gobernantes y gobernados. Los diferentes tipos de circulación ponen de relieve el dinamismo de la relación clase política-sociedad, brindando un carácter procesal para entender las actualizaciones y reactualizaciones que esa minoría lleva a cabo. La socialización común previa posibilita el primer tipo de circulación, que supone la intercambiabilidad de funciones entre sus miembros. Debido a esta circulación constante, se pueden tejer políticas en una misma dirección, así como reforzar la organización que sostiene al grupo.

El segundo tipo de circulación, la cooptación de nuevos miembros, también dinamiza esa organización, pero logra ese objetivo en los marcos que propone la clase política dentro de la cerrazón. Éste es el instrumento para medir el estado de salud de la clase política, evita el ingreso de numerosos nuevos individuos que transformarían

en plebe a la minoría, como una cerrazón tal que no le permite actualizar y reactualizar su organización. Si la clase política no se adapta a los cambios en la configuración, tiene posibilidades de ser víctima del tercer tipo de circulación, su reemplazo por otra clase política. En este sentido, no pueden excluir de sus preocupaciones, a las políticas sociales.

También son dinámicos los espacios de socialización, no sólo por los contenidos que circulan a su interior, sino por la forma. Cambian los lugares de encuentro, se expanden las funciones estatales y deben utilizarse conceptos teóricos que den cuenta de estas modificaciones. En estos espacios de socialización, la clase política construye políticas en una misma dirección y difunde las nuevas corrientes ideológicas.

Los gobiernos de Agustín Justo y de Juan Perón han sido objeto de múltiples estudios históricos que en mayor o menor medida insisten en los cambios que implica el intervencionismo estatal de la década de 1930 frente al modelo liberal; en las mutaciones que el Estado benefactor y popular opera en relación con el auge conservador y fraudulento de esta década. En este estudio la propuesta es poner el foco no sólo en las transformaciones, sino también en las continuidades que se registran en esa circulación de las élites.

Para paliar la crisis de distribución que se consolida a partir de 1930 el gobierno de Justo promueve políticas sociales correctivas de la desigualdad que –tanto en sus destinatarios como en los elencos técnico-burocráticos que las ponen en práctica– dan muestras de apertura, de cooptación de miembros de la mayoría.

El peronismo que emerge sin el apoyo de la clase política tradicional debe acentuar la segunda de las circulaciones y, en este sentido, la legislación laboral, la planificación, la distribución del ingreso y la problemática habitacional se convierten en ámbitos apropiados para la nueva manera de hacer política, cuando la “justicia social” es algo más que una bandera doctrinaria.

## BIBLIOGRAFÍA

Agulla, Juan C. (1987), *Teoría sociológica. Sistematización histórica*, Ediciones Depalma, Buenos Aires.

- Arnaudo, Aldo (1987), *Cincuenta años de política financiera (1934-1983)*, El Ateneo, Buenos Aires.
- Belmartino, Susana (2005), "Servicios de salud y sistema político: Argentina, Brasil y Chile entre 1920 y 1970", Armus, Diego (comp.), *Avatares de la medicalización en América Latina 1870-1970*, Lugar Editorial, Buenos Aires.
- Berrotarán, Patricia (2002), *Estado y planificación. Argentina 1946*, AAHE/CRICYT/UNCuyo, XVIII Jornadas de Historia Económica, versión en CD-rom.
- Botana, Natalio (1977), *El orden conservador. La política argentina entre 1880-1916*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
- Campins, Mónica; Gaggero, Horacio y Garro, Alicia (1992), "La Fundación Eva Perón", Castro Gomes, Ángela de y otros, *Estado, corporativismo y acción social en Brasil, Argentina y Uruguay*, Biblos, Buenos Aires.
- Comisión de Homenaje al General Agustín P. Justo en el cincuentenario de su desaparición (1993), *Conferencias, discursos y artículos*, Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Buenos Aires, Colección Estudios 17.
- Del Campo, Hugo (1983), *Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable*, Flacso/Biblioteca de Ciencias Sociales, Buenos Aires.
- Despontin, Luis (1937), "La legislación obrera y la previsión social en el gobierno del Gral. Justo", *La Obra de Gobierno Argentino presidido por el General Agustín P. Justo*, Momento Político Sudamericano, Buenos Aires.
- Fressoli, Mariano (2000), "La ciudad y el recorrido del secreto", Vernik, Esteban (comp.), *Escritos contra la cosificación. Acerca de Georg Simmel*, Grupo Editor Altamira, Buenos Aires.
- Gaggero, Horacio y Garro, Alicia (1996), *Del trabajo a la casa. La política de vivienda del gobierno peronista 1946-1955*, Biblos, Buenos Aires.
- Girbal-Blacha, Noemí (2003), "La Junta Nacional para Combatir la Desocupación. Tradición y modernización socioeconómica en la Argentina de los años treinta", *Estudios del Trabajo*, núm. 25, ASET, Buenos Aires.
- (1999), "La pobreza vista desde arriba. Una interpretación histórica desde el discurso peronista (1946-1955)", *Anuario de Estudios Americanos*, LVI-2, Sevilla.
- , Zarrilli, Adrián y Balsa, Javier (2001), *Estado, sociedad y economía en la Argentina 1930-1997*, UNQ Editorial, Buenos Aires.
- Halperin Donghi, Tulio (2007), *La República imposible (1930-1945)*, Ariel Historia, Biblioteca del Pensamiento Argentino v, Buenos Aires.
- Macor, Darío (2001), "Partidos, coaliciones y sistemas de poder", Cattaruzza, Alejandro, *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política*, Sudamericana, Buenos Aires.

- McGee Deutsch, Sandra (2003), *Contrarrevolución en la Argentina, 1900-1932. La Liga Patriótica Argentina*, Buenos Aires, UNQ Editorial.
- Meisel, James (1975), *El mito de la clase gobernante*, Gaetano Mosca y la élite, Amorrortu Editores, Buenos Aires.
- Mosca, Gaetano (2002), *La clase política*, FCE, México.
- O'Connell, Arturo (1984), "La Argentina en la depresión: los problemas de una economía abierta", *Desarrollo Económico*, núm. 92, vol. 23.
- Page, Joseph (1984), *Perón*, Javier Vergara Editor, Buenos Aires.
- Panettieri, José (1966), *Los trabajadores*, Jorge Álvarez, Buenos Aires.
- Parkin, Frank (1974), *Strategies of social Clousure in Class Formation*, Tavistock Publications.
- Potash, Robert (1985), *El ejército y la política en la Argentina*, Hyspamérica, Buenos Aires.
- Privitellio de, Luciano (1997), *Agustín P. Justo. Las armas en la política*, FCE, Buenos Aires.
- Rouquié, Alain (1981), *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Emecé Editores, Buenos Aires.
- Sidicaro, Ricardo (1996), *Juan Domingo Perón. La paz y la guerra*, FCE, Buenos Aires.
- Tcach, César (1991), *Sabatinismo y peronismo: partidos políticos en Córdoba 1943-1955*, Sudamericana, Buenos Aires.
- Waldmann, Peter (1981), *El peronismo 1943-1955*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.